

**DECIMOCTAVO INFORME
ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO
HUMANO SOSTENIBLE**

Informe Final

**Visión de los líderes empresariales y sociales sobre el
gobierno y el país**

*Investigador:
Alonso Ramírez Cover*



Nota: Las cifras de las ponencias pueden no coincidir con las consignadas por el XVIII Informe Estado de la Nación en el tema respectivo, debido a revisiones posteriores. En caso de encontrarse diferencia entre ambas fuentes, prevalecen las publicadas en el Informe.

Contenido

Resumen ejecutivo	3
Introducción	3
Visión sobre la economía	4
Visión sobre el gobierno.....	6
Balance final y conclusiones.....	14
Fuentes de información	16

Resumen ejecutivo

Este informe analiza el desempeño del gobierno y la situación económica y política del país, a partir de las percepciones y opiniones de diferentes líderes empresariales y sociales costarricenses. Así, se presentan los resultados de una ronda de entrevistas semi-estructuradas realizadas entre mayo y junio de 2012. Aunque las opiniones varían respecto al estado de la economía nacional, predomina un claro consenso sobre los principales problemas del país y el mal desempeño del actual gobierno. Muchos de los entrevistados opinan que, la solución de muchos de los problemas políticos que limitan el desarrollo nacional implica la necesidad de extensos procesos de concertación que involucren a los diferentes grupos de la ciudadanía, así como de una profunda reforma del estado costarricense. A pesar de esto, parece no existir un claro acuerdo sobre los contenidos y alcances de dicha reforma o sobre los objetivos puntuales que deberían fundamentarla.

Descriptor: Sectores sociales, Poder Ejecutivo, proyecto nacional, Asamblea Legislativa, economía, crisis económica, reforma del Estado, política nacional, concertación nacional, Asamblea Constituyente.

Introducción

El pasado primero de mayo de 2012, la presidenta Laura Chinchilla presentó ante la Asamblea Legislativa su segundo informe de labores. Este hecho marca la mitad del período de gobierno y por ende, se trata de un momento ideal para evaluar el desempeño reciente de esta administración. Tomando ventaja de esta coyuntura, este estudio busca construir un balance que permita dilucidar cuál es el estado de situación de la economía, del país y del gobierno. Ahora bien, la gran diferencia con otros trabajos de esta naturaleza es que este en particular se fundamenta en percepciones de representantes políticos de importantes organizaciones de la sociedad civil del país.

Las percepciones del liderazgo social y empresarial de un país es crucial importancia para la política nacional. Almond y Verba (1963, ver también Lichterman y Cefai, 2006 Inglehart y Klingemann, 2000; Norris, 1999) acuñan el concepto de cultura política para explicar cómo la estabilidad de el sistema democrático depende grandemente de las actitudes e ideas que la ciudadanía construya de éste. Sin duda, las ideas y opiniones desarrolladas y que predominan dentro de las cúpulas políticas de los más influyentes grupos de la sociedad civil no solo constituyen un tema crucial para la estabilidad democrática, sino que también en uno de los principales substratos ideativos que determinan su funcionamiento cotidiano. Estas ideas constituyen gran parte de la base, los términos, los alcances y el lenguaje del debate político nacional (Hay, 2006). Puesto de otra forma, sus opiniones e ideas no son sólo parte de la política nacional, sino que, a menudo, terminan constituyéndola.

Este informe presenta los resultados de una ronda de quince entrevistas semi-estructuradas realizadas entre mayo y junio de 2012 a líderes empresariales y sociales del país. El objetivo de las éstas era indagar opiniones e ideas que estas personas hayan desarrollado sobre la situación económica y política del país – en especial, sobre el desempeño de la administración Chinchilla Miranda. Además, se buscaba que los entrevistados profundizaran sobre sus expectativas sobre los retos que este gobierno deberá enfrentar en los próximos dos años para movilizar su agenda, los obstáculos que el sistema político nacional imprime sobre la agenda de desarrollo del país y las posibles soluciones a éstos.

Este estudio concluye que, a pesar de que hay opiniones que varían sobre la situación económica del país, hay grandes consensos alrededor de los principales problemas que afectan al país y sobre el mal desempeño político tenido por el actual gobierno. Muchos de los entrevistados opinan que, la viabilidad de soluciones permanentes a los problemas políticos que limitan el desarrollo del país, es imperativo un extenso proceso de concertación con los diferentes grupos de la sociedad civil, perfilado hacia una profunda reforma del estado costarricense. Pero, habiendo dicho esto, es bastante claro que no existe un acuerdo real entre los informantes sobre cuáles deben ser los contenidos, los objetivos fundamentales o los alcances de dicha reforma.

Visión sobre la economía

Al principio de cada entrevista, se les consultó ampliamente a los informantes sobre sus opiniones al respecto de la situación económica de Costa Rica. Existe consenso entre los entrevistados de que la situación económica actual del país no puede entenderse sin referencia a una reciente crisis que afectó al país. La crisis económica de 2008-2009 causó una desaceleración e incluso una reversión del rápido crecimiento económico experimentado por Costa Rica durante la primera década del siglo XXI. Hay común acuerdo entre los entrevistados con que el 2009 fue el punto bajo de la crisis dado el bajo rendimiento económico del país, lo que se vincula con datos empíricos que relatan de un decrecimiento del PIB (ver PEN, 2010). Ellos también concuerdan en que la crisis fue particularmente dañina para el país dado el impacto de esta alrededor de dos áreas sensibles de la economía nacional: las exportaciones y la inversión extranjera directa. Esto es consistente con datos de la CEPAL (2011) que sustentan reducciones de hasta un 8% en la exportación costarricense (CEPAL, 2011). Como es de esperar, este decrecimiento causó una reducción de al menos 25.000 puestos de trabajo, especialmente en el sector informal y concentrado en actividades productivas como la agricultura y la construcción (62%) (Alfaro et al., 2010: 37).

A pesar de esto, siete de los quince entrevistados (47%) opinó que la situación económica actual del país es buena dentro de las perspectivas de la crisis y del panorama nada halagüeño de la economía global. Ellos afirman que ha habido un repunte en la producción que determina un proceso rápido de recuperación económica, pero, ello no faculta decir que los niveles productivos previos hayan sido alcanzados. Representantes entrevistados del sector turismo y construcción fueron enfáticos en decir que ha habido crecimiento económico pero que este no es en nada comparable a la 'bonanza económica' que caracterizó la década del 2000. Otros líderes de cámaras empresariales dijeron que esta recuperación aunque positiva, es bastante frágil, pues depende de las salidas políticas que se planteen sobre la crisis de deuda pública que ahora afecta a varios países europeos y, en alguna medida, a los Estados Unidos también.

Al profundizar sobre las características puntuales de la recuperación, los entrevistados que ven la situación económica como positiva opinaron que ésta no debe generalizarse, pues ha habido sectores que no se han recuperado del todo. El crecimiento económico por sectores ha sido desigual en los últimos dos años, en parte, como efecto de que la crisis ha sido prorrateada de formas diferentes, afectando los incentivos de mayor inversión en ciertas partes que en otras. Así, sectores como el agrícola y ciertas partes del sector turístico, para algunos, no han demostrado señales de una fuerte recuperación. Esta perspectiva es compartida por

los líderes empresariales representantes de estos sectores que reconocen las marcadas dificultades para alcanzar tasas de crecimiento previo a 2008.

Cuadro 1
Opinión sobre la economía actual y el desempeño económico del país de los últimos dos años. 2012

Rubro	Líderes empresariales		Otros líderes sociales		Total	
<i>Situación económica actual</i>						
Buena	7	100,0%	0	0,0%	7	50,0%
Regular	2	66,7%	1	33,3%	3	21,4%
Mala	1	25,0%	3	75,0%	4	28,6%
<i>Desempeño reciente de la economía</i>						
Mejor	10	100,0%	0	0,0%	10	66,7%
Igual	0	0,0%	1	100,0%	1	6,7%
Peor	1	25,0%	3	75,0%	4	26,7%

Fuente: Ramírez, 2012.

Esta discusión sobre el desempeño económico permite conocer sobre el marco discursivo desde el que los informantes parten para comunicar sobre hechos y eventos y sobre los que ellos actúan estratégicamente con el objetivo de alcanzar audiencias meta (ver Lictherman y Cefai, 2006: 402; Snow et al., 1986). Así, existen diferencias cruciales en las interpretaciones sobre la situación económica si se comparan las respuestas de líderes empresariales o sociales. Los primeros enarbolan un discurso en el que el factor crucial para juzgar sobre el comportamiento reciente de la economía tiene que ver con la generación de mayor crecimiento. Para ellos, dado que la producción nacional ha logrado recuperarse rápidamente, la crisis ha sido bien atendida.

En comparación, los segundos evalúan el comportamiento de la economía tomando como punto de partida la manera en que se distribuye el producto social. Tres de cuatro líderes sociales entrevistados afirman que la situación económica es mala. Para argumentar esto, ellos describen una paradoja: aunque concuerdan con sus contrapartes empresariales sobre la mejora en el crecimiento económico nacional, también reconocen que los beneficios de este crecimiento no han logrado canalizarse para satisfacer las demandas de un sector sustancial de la población costarricense. Esto, ellos afirman, es una tendencia implícita en el sistema económico nacional la cual es incentivada por la crisis económica pero que no es, precisamente, producto de ésta.

Estas diferencias en el marco discursivo sustentan opiniones bastante variadas sobre la evaluación del desempeño económico reciente del país y sobre la pertinencia de la política económica de la administración Chinchilla Miranda. Así, diez de los quince entrevistados (67%), todos ellos representantes empresariales, opinan que la situación económica ha mejorado en los últimos dos años. Ellos afirman que ha habido mejoras en el crecimiento económico y que las medidas en contra de la crisis del gobierno anterior habían atenuado de alguna forma sus efectos previos. Contrariamente, los líderes sociales opinaron que el desempeño había sido significativamente más malo que hace dos años (tres de los cuatro entrevistados), en gran medida, porque la crisis dio una legitimación discursiva al

gobierno y a la empresa privada de no aumentar salarios atendiendo aumentos en la inflación, como medida para contener la crisis.

Curiosamente, existe un claro consenso con respecto al efecto de las medidas anti-crisis del gobierno anterior. Como medida para atender la crisis, el gobierno anterior tomó la decisión de compensar el decrecimiento de puestos en el sector privado con una fuerte expansión del empleo público, financiando esto con los superávits financieros que el Estado había recogido tras varios años de austeridad fiscal a principio de la década (PEN, 2010). Aunque la mayoría reconoció que estas medidas particulares fueron justificables para atender la crisis, sus efectos actuales han sido desdeñados por tanto líderes sociales como empresariales. Para ambos sectores, esta situación ha sido el detonante directo del problema fiscal de los últimos dos años y por ende, de la promoción de una reforma fiscal por parte de autoridades de gobierno.

Los entrevistados afirman que una reforma fiscal es necesaria para el país, pero no existe un claro acuerdo sobre la orientación que esta deba tener. Así, grupos sociales apoyan la promoción de una estructura progresiva de impuestos y estuvieron en contra de la reforma en tanto no proponía precisamente esto. Por otra parte, los líderes empresariales afirmaron que el problema resulta de una mala recaudación y que nuevos impuestos no son necesarios. En cualquier caso, ambos grupos fueron claros en señalar que la reforma propuesta por el gobierno – como eje crucial de la política económica – era poco viable y pertinente. Al ser esta pieza de legislación la parte crucial de la agenda económica de gobierno, muchos han adicionado que cualquier mejora económica de los últimos dos años se ha dado ‘a pesar del gobierno y no producto de éste’.

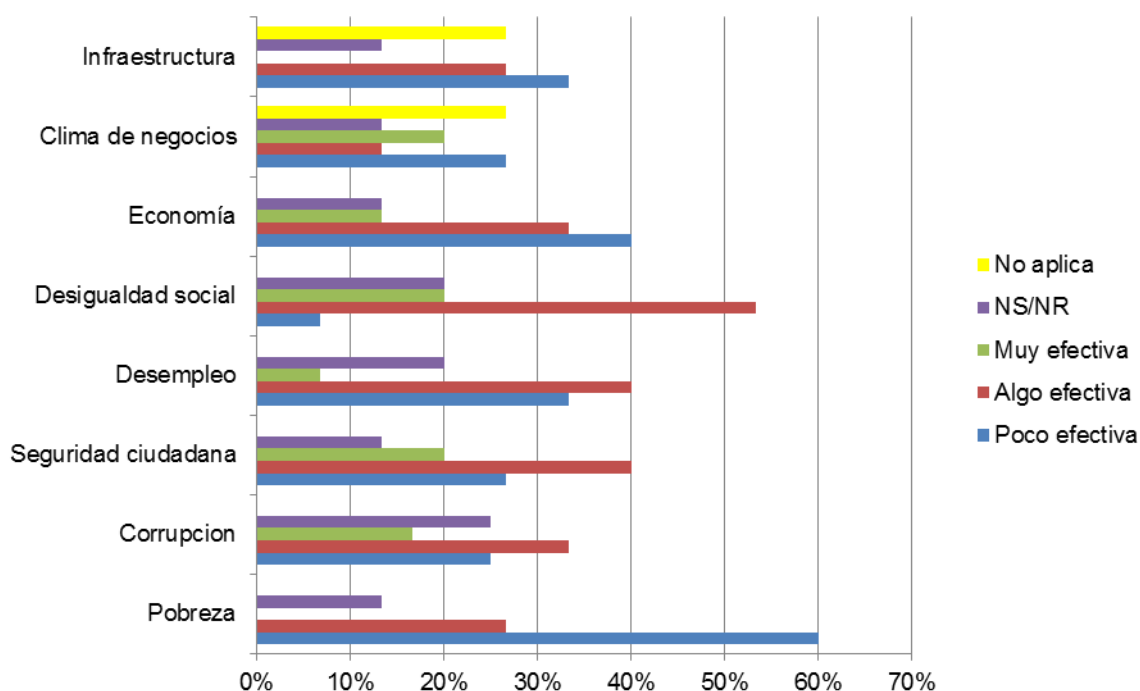
Visión sobre el gobierno

En la entrevista se enfocó predominantemente en conocer sobre la percepción de los entrevistados de la gestión del gobierno en los últimos dos años. Para hacer esta evaluación se solicitaron opiniones de los entrevistados sobre el desempeño gubernamental en el desarrollo de políticas sustantivas como al respecto de estrategias políticas para movilizarlas.

Los resultados reflejan una visión predominantemente negativa de los informantes sobre las acciones políticas y el desempeño del gobierno para concretar sus objetivos sustantivos de agenda. Proporciones de alrededor del 30% de los entrevistados afirmaron que el gobierno había sido poco efectivo cumplimiento con las metas que se había planteado a sí mismo en 2010, especialmente al respecto del combate a la pobreza. Nueve de quince entrevistados (60%) afirmó que el gobierno había sido poco efectivo en este rubro. Esto es bastante interesante, considerando que la agenda social del gobierno está orientada precisamente a desarrollar proyectos para atender las necesidades básicas de la población pobre. De hecho, los proyectos ‘estrella’ en materia social de la administración actual están vinculados con la expansión de servicios y ayudas directas condicionadas a esta población. Ejemplos son la Red de Cuido, la expansión del programa Avancemos y el esfuerzo de reordenamiento de las ayudas del gobierno para enfocarse precisamente en estos segmentos de la población (MIDEPLAN, 2011). La razón de esta posición tiene que ver con la falta de un claro modelo que faculte a esta población integrarse de manera apropiada en la economía. Varios de los entrevistados dijeron que estas medidas eran puramente asistencialistas y que estaban aisladas de medios para permitir una redistribución efectiva de la riqueza. ,

Los representantes empresariales, en particular, dijeron que el combate de la pobreza no se ha dado de forma coherente con una buena gestión del gobierno para mejorar la productividad y la integración de estos sectores en el aparato productivo nacional. Así, el país ha visto surgir una economía dual en la que ciertos sectores que han logrado desarrollarse bien ahora producen gran cantidad de riqueza frente a otros que han quedado rezagados. Esto termina causando una serie de tensiones entre las poblaciones que representan ambos sectores de la población. Esta dualidad en la economía tiene su origen en un largo proceso de inversión nacional alrededor de sectores como la alta tecnología y los servicios causando un impacto bastante positivo para la economía en su conjunto. En torno a esta situación, los gobiernos han sido incapaces de dar las condiciones para que segmentos rezagados de la población se integren a estos sectores de alto crecimiento y así, acceder a los beneficios económicos que allí se generan. En estas circunstancias, los gobiernos deberían promover una mayor productividad para el país y es en este punto, donde el gobierno ha fallado más claramente

Gráfico 1
Percepción sobre la efectividad de la política de gobierno en diversos temas. 2012



Fuente: Ramírez, 2012.

Ahora bien, no todos los temas de agenda del gobierno fueron calificados de manera completamente negativa. Los representantes reconocen algo de efectividad en la estrategia del gobierno para el combate de la corrupción, la seguridad ciudadana, el desempleo, la infraestructura y, curiosamente, la desigualdad social, donde ocho señalaron que había habido algunos logros. Algunos representantes hicieron comentarios particulares sobre algunas áreas de su interés. Los directores de cámaras vinculadas a la promoción turística y la construcción fueron muy claros en afirmar que ha habido mejoras y un buen acercamiento efectivo del gobierno al problema de la seguridad ciudadana. Aunque opinaron que los planes del gobierno para aliviar este problema parecen seguir la fórmula de otras administraciones –

basada en aumentar el número de oficiales – existe una focalización más apropiada de este ejercicio. Ellos ejemplificaron esta situación con acciones como el desarrollo de la policía turística.

Los representantes empresariales entrevistados dieron calificaciones poco halagüeñas a las acciones del gobierno en torno a la agenda en infraestructura. Esta es una agenda clave que el gobierno planteó en el Plan Nacional de Desarrollo en 2011. La preocupación aquí no tiene que ver tanto con el planteamiento de la agenda – con el cual estos representantes parecen concordar – sino que con la naturaleza de la ejecución de los proyectos puntuales. Ellos afirman que, a pesar de que el gobierno tiene los recursos financieros necesarios para empezar a desarrollar sus proyectos – haciendo referencia implícita a los múltiples préstamos y contratos de concesión iniciados o aprobados por esta administración – los atrasos en la ejecución abundan. Estos atrasos, señalan, afectan la percepción que tienen los inversionistas del país y pueden perjudicar la productividad nacional en el largo plazo.

Esto contribuye a comprender el marco discursivo utilizado por los representantes empresariales y en donde predomina una idealización de la ‘eficiencia del mercado’. Así, para algunos entrevistados los problemas que caracterizan la estrategia en infraestructura – como los que definen al sistema político – se entienden como problemas de ejecución eficiente. Es decir, tienen que ver con la incapacidad de la estructura decisoria de asignar los recursos con que cuenta a los sectores sociales encargados de producir el desarrollo nacional (i.e.: los empresarios y no el estado). Dado que esto sucede a pesar de que los planes desarrollados por el liderazgo político han sido consensuados con el sector empresarial, la preocupación más importante que se plantea desde estos sectores tiene que ver con cómo hacer que la decisión política del liderazgo sea reproducida por la burocracia. Así, es precisamente en las resistencias que hay desde los ‘mandos medios’ y la burocracia a seguir el mandato político de la cúpula, donde se resume el problema central del Poder Ejecutivo.

Ahora bien, aunque los representantes sociales concuerdan en que los avances en las agendas anteriores también han sido reducidos, la explicación esbozada por ellos es completamente diferente. En las entrevistas, los informantes reiteradamente plantearon un concepto clave para comprender cómo observan el éxito de la agenda del gobierno: neoliberalismo. Aunque nunca hubo una definición precisa de qué se puede entender por esto, los entrevistados usan el concepto para ejemplificar políticas gubernamentales destinadas a favorecer el desarrollo de una economía de mercado a costas de derechos laborales y ambientales que podrían encarecerla. Sujetos a este concepto, muchos de los entrevistados afirmaron que las políticas sociales del gobierno actual se han orientado a ‘paliar’ la situación actual, la cual es únicamente resoluble a través de una transición a una economía más solidaria. Así, los términos de su rechazo de la agenda de gobierno se fundamentan en que ha habido grandes ‘ganadores’ de la política económica nacional mientras que ha habido también notables sectores ‘perdedores’, por ellos representados.

Cualquiera que sea el sector de proveniencia, los entrevistados fueron muy claros en afirmar que la política gubernamental en materia económica no ha sido adecuada. Un 67% de los entrevistados dijeron que las medidas del Ejecutivo en materia económica no han sido efectivas para atender los problemas que afectan al país. Tanto críticos como partidarios del gobierno fueron claros en afirmar que la

administración actual tuvo la difícil tarea de enfrentar condiciones económicas heredadas del gobierno anterior. Pero, aunque muchos de ellos señalaron que si la economía ha mejorado en los últimos dos años, esto se ha dado 'a pesar del gobierno y no como resultados de éste'.

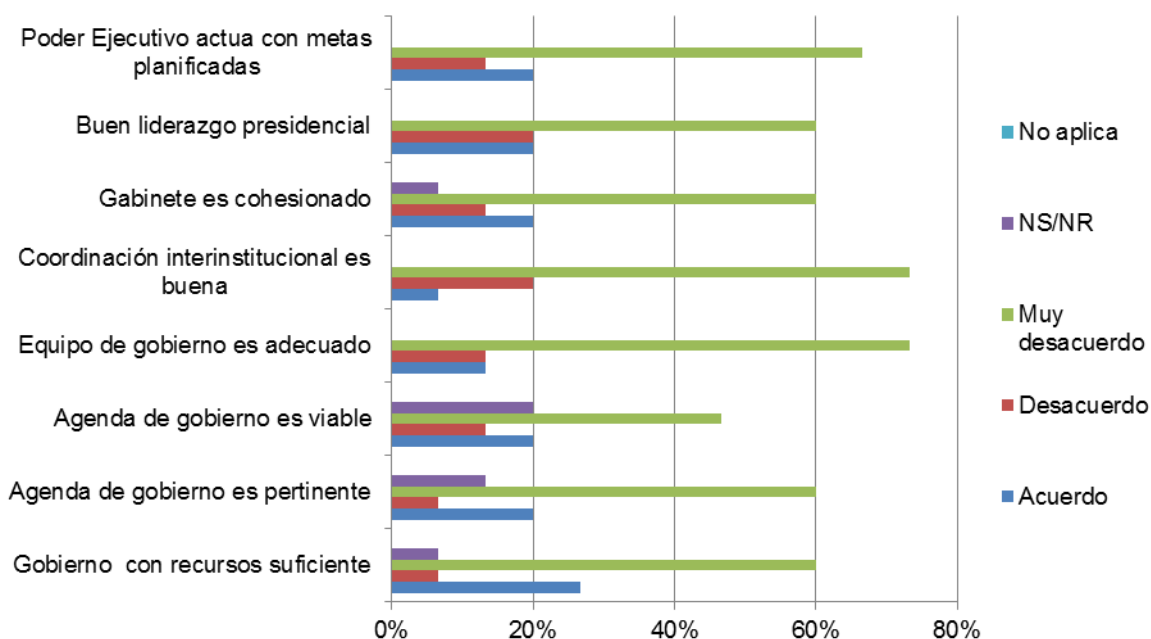
La crítica a la política económica del gobierno debe ser pormenorizada. En realidad, las entrevistas demostraron que al menos los sectores empresariales del país están muy de acuerdo con muchos de los programas particulares que ha planteado el gobierno como los objetivos de inversión pública. No obstante, lo que es común a las críticas de los informantes del sector empresarial es la falta de ejecución de las mismas. El gobierno en realidad tiene buenos planes, el gran problema aquí es que no ha encontrado la forma de ejecutarlos. Así, para muchos la economía crece en función de las cualidades propias del sector privado nacional y de que las condiciones para que este se desarrolle por su cuenta han sido dadas de antemano. Los representantes empresariales señalan que la apertura económica de la década de 1980 y la diversificación productiva que esta fomentó dieron herramientas para conformado una capacidad que habilita resistencias a la crisis. Pero más allá que esto, en ausencia de un gobierno efectivo en materia económica, el desarrollo del país sucede de forma inercial.

Esta discusión sobre las dificultades de ejecución del gobierno, lógicamente lleva a una evaluación de su gestión política y es precisamente en este punto que las críticas son más resonantes (ver gráfico 2). La mayoría de los entrevistados concluye que ha habido problemas bastante serios con la forma en que el Poder Ejecutivo ha racionalizado sus recursos políticos para movilizar su agenda. Nueve de quince entrevistados dijeron que ha faltado cohesión en el gabinete de gobierno y que el liderazgo presidencial ha sido poco persuasivo o claro; diez de quince señalaron que se carecen de metas claras y once de quince opinaron que el equipo de gobierno no fue bien seleccionado y que no existe una clara coordinación interinstitucional de las acciones tomadas.

Para entrevistados provenientes del sector empresarial el tema de la coordinación es el más importante. Para estos informantes, gran parte de las debilidades del gobierno se han derivado del actuar contradictorio del gobierno. Así, aunque existen un conjunto de planes puntuales sobre los que debe movilizarse una agenda política, no existe coherencia en el accionar institucional a la hora de implementar estas agendas. Así, surgen situaciones frecuentes en que instancias de funcionarios públicos – incluso subalternos – revierten acciones políticas destinadas a fomentar proyectos de interés nacional. Ellos comentaron constantemente sobre el efecto que la reactividad de los mandos medios genera para el desarrollo de la seguridad jurídica. Así, utilizaron una multitud de ejemplos en que inversionistas y empresarios han fomentado actividades productivas con la venia de la cúpula política del gobierno, pero que han visto estas actividades paralizadas por funcionarios de rango medio y entidades particulares dentro del gobierno. Esto supone una afectación negativa de derechos adquiridos de los empresarios para desarrollar ciertos cursos de acción, constituyéndose en una amenaza a la seguridad de las inversiones en Costa Rica. La situación planteada anteriormente constituye, para líderes empresariales entrevistados, evidencia de un problema más importante: la falta de gobernabilidad (ver sección siguiente).

Gráfico 2

Opinión de líderes empresariales y sociales sobre el desempeño, planes y metas del Poder Ejecutivo. 2012



Fuente: Ramírez, 2012.

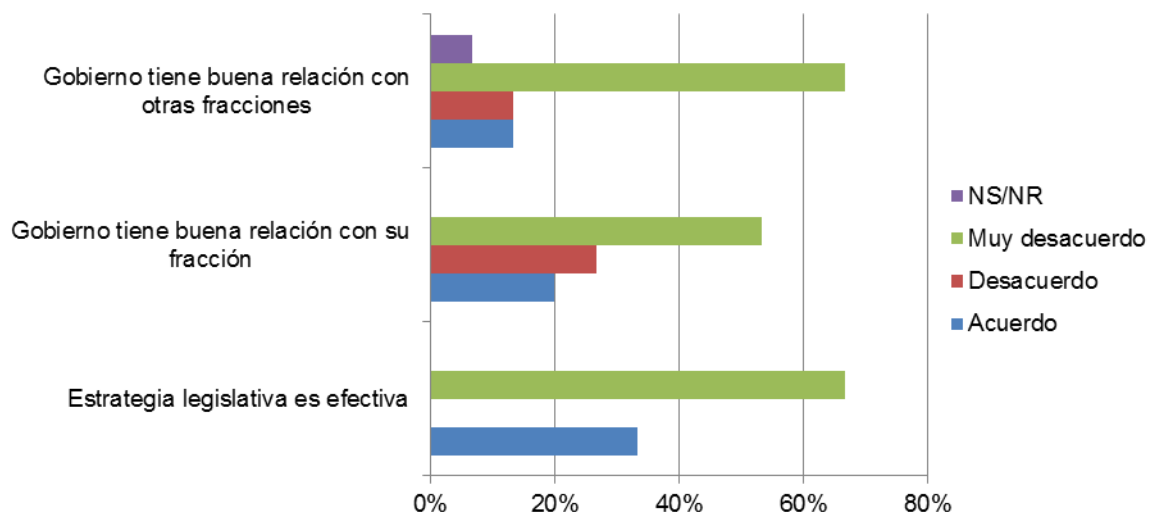
Curiosamente, cuando se solicitó a los entrevistados que señalaran cuál de los anteriores constituía el problema más importante del Ejecutivo, un 45% consideró que era la falta de liderazgo presidencial. Desde la perspectiva general de los entrevistados, la falta de liderazgo ha sido conducente a problemas vinculados con la falta de cohesión y mala operación del gabinete, mala selección del equipo de gobierno y la ausencia de una coordinación interinstitucional saludable. Este mal liderazgo ha terminado acentuándose en el marco del desgaste natural de la presidencia y en torno a los problemas que los informantes han percibido dentro del partido de gobierno. Esta opinión se relaciona también de forma clara con la ausencia de un plan claro para el país más allá de un conjunto de programas sobre el que el gobierno ha sido incapaz de definir prioridades. Debe decirse en este punto que nueve de quince entrevistados (60%), dijo que el gobierno no cuenta con un proyecto país bien definido y ha adolecido de la ausencia de metas claras. Así, el gobierno ha puesto atención a problemas según la coyuntura lo va determinando y no según metas claras para cada año. Esto ha causado que en la búsqueda de proyectos cruciales definidos por la coyuntura, otros deban diluirse al punto de ser poco alcanzables en los dos años por venir.

Como consecuencia de la aparente falta de liderazgo de la presidencia y de un proyecto claro, los líderes también reconocieron que la agenda legislativa del gobierno no había sido la más adecuada. Diez de quince (67%) afirmó estar en desacuerdo con la afirmación de que la estrategia legislativa del Ejecutivo fuera efectiva o que el gobierno había logrado formar una buena relación política con las otras fracciones legislativas. Ambas respuestas fueron acompañadas de impresiones más cualitativas de que el gobierno no había hecho los mejores acercamientos con las fracciones con agendas afines. Los informantes comentaron que ha existido una falta de disposición activa de la Presidencia para escuchar sobre

puntos de vista alternativos en el Congreso como de la sociedad civil. Otros afirmaron no estar completamente en contra de proyectos impopulares como el Plan Fiscal, pero si se vieron muy contrarios al manejo gubernamental de las negociaciones y del manejo de alianzas para alcanzarlos. Así, en discusiones cruciales como éstas los entrevistados afirmaron que no hubo acercamientos para reflejar los intereses de los entrevistados, los cuales, incluso, pudieron acordar una reforma con algunos cambios (ver también Gómez y Meneses, 2011).

Otro punto que se cuestionó de forma común por los entrevistados fue la visión cortoplacista de la estrategia de gobierno en el Congreso. Para los informantes, el gobierno ha venido desarrollando y descartando alianzas políticas sobre la base de objetivos legislativos cambiantes como la aprobación de un proyecto particular de la agenda, el control del Congreso o de comisiones clave. No ha habido un proyecto legislativo coherente basado en los múltiples proyectos de la agenda. Así, las alianzas deben construirse sobre la base de consensos puntuales y no fundados en agendas más extensas, lo que supone un desgaste natural del Poder Ejecutivo. En este marco, además, no se ha maniobrado efectivamente en el ambiente legislativo y se han generado conflictos innecesarios que han terminado debilitando aún más la posición negociadora del gobierno. Ciertamente la llegada de nuevas figuras (como el ministro de la Presidencia actual) se considera muy positiva, pero no ha resuelto todos los problemas.

Gráfico 3
Opiniones de líderes empresariales y sociales sobre la estrategia legislativa del Poder Ejecutivo. 2012



Fuente: Ramírez, 2012.

Ahora bien, no todo el problema yace en el gobierno mismo, sino que también se origina en la labor que hacen los partidos de oposición en el Congreso. Nueve de quince entrevistados (60%) afirmaron que la labor realizada por partidos de oposición es mala y otros cinco (33%) afirmaron que era a lo sumo regular. A menudo, los entrevistados afirmaron que la oposición realizada hasta el momento se caracteriza por sus incoherencias y contradicciones, dado que las mismas fuerzas de oposición están sujetas a altos grados de división política interna. Muchos reconocieron que este problema tenía que ver con el hecho de que las mismas fracciones de oposición están repletas de intereses localistas y personalistas que

impiden concretar una oposición coherente fundada en un interés nacional. Los partidos políticos, dicen los informantes, no cuentan con planes nacionales sino que laboran sobre objetivos puntuales y personales, lo que se traduce, lógicamente, en la posibilidad de bloqueos de la decisión política legislativa en razón del interés de un pequeño grupo de interesados.

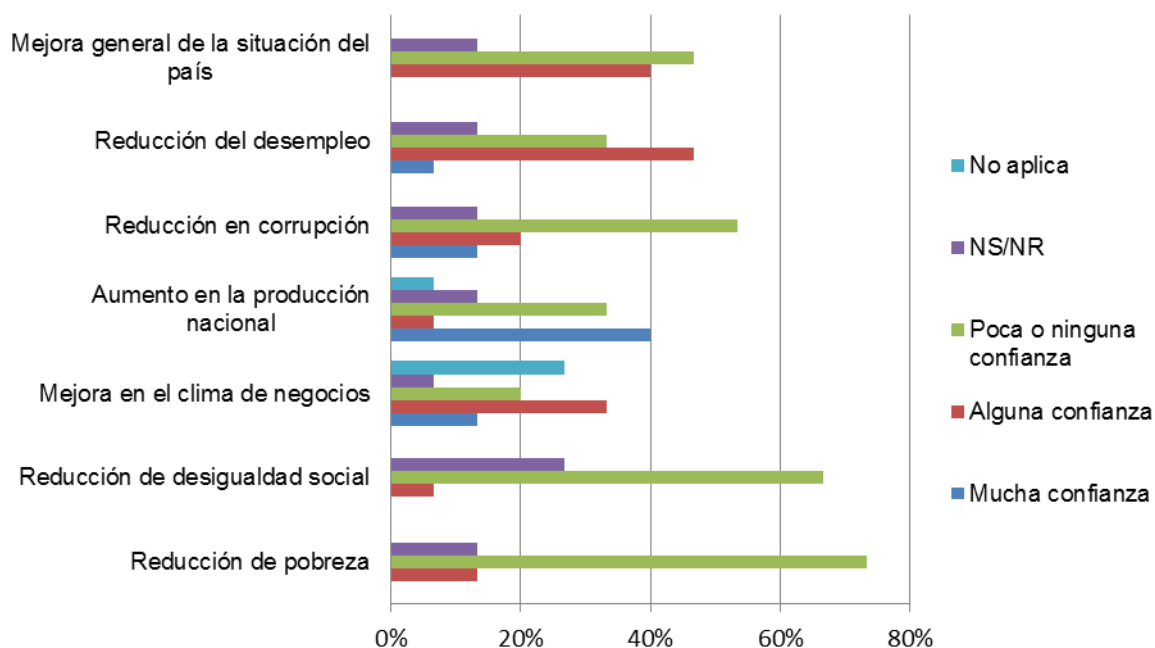
La división interna ha hecho que fracciones políticas no operen realmente como tales. Esto se traduce necesariamente en que la negociación política con el gobierno sea aún más problemática. Así, no existen líneas de negociación comunes, sino que estas tienden a marcar divisiones que les impiden mantener una coherencia común. Esto sólo es agravado por otro gran problema planteado por los entrevistados sobre el grado de preparación política y profesional de los diputados. Existe una interpretación común de que los diputados son inescapablemente malos y están poco capacitados para ejercer sus puestos. El perfil elaborado por los informantes permite reconocerlos como políticos localistas y que contribuyen poco a la solución de problemas nacionales.

Ahora bien, ampliando el tema de discusión para incluir asuntos como la conflictividad social, los informantes también reconocieron una mala gestión del gobierno, aunque no de forma tan marcada como el anterior tema. Ocho de los quince entrevistados (53%) dijo que la estrategia de atención de la conflictividad no era buena. Entre estos, existe un claro consenso de que la atención de la conflictividad social de este gobierno es predominantemente reactiva e inoportuna. Así, el gobierno conoce de los problemas que originan estos hechos, pero no los atiende hasta que sea demasiado tarde. Además, al atenderlos, se preocupa únicamente por resolver a las demandas inmediatas sin contextualizarlas con objetivos políticos nacionales o con un deseo de atender las causas estructurales del problema. Esto se traduce necesariamente en desgastes de la figura del gobierno y de la presidencia. Los líderes sociales perciben que el gobierno no está interesado en un acercamiento con sus organizaciones y que a menudo les plantea barreras de acceso al debate destinadas a agotar sus posiciones.

Los líderes sociales como algunos de los empresariales entrevistados han afirmado de forma generalizada que ha habido una mala gestión en general con la sociedad civil dada la ausencia de espacios de diálogo claros. Así, para el liderazgo social, la única forma en que se percibe que se puede llamar la atención de la presidencia es el desarrollo de manifestaciones públicas y otros tipos de acciones colectivas. De manera distinta, la mitad de los líderes empresariales entrevistados señalaron que el gobierno acostumbra buscarlos para el desarrollo y planeamiento de políticas públicas. De esta forma, los representantes sociales, en general, reclamaron espacios en procesos de concertación social y agendas de compromiso mutuos entre los sectores.

Gráfico 4

Confianza de los líderes empresariales y sociales sobre desempeño futuro del Poder Ejecutivo. 2012



Fuente: Ramírez, 2012.

Este es un gobierno que ha perdido mucho del apoyo político con el que alcanzó la presidencia y la pérdida de este apoyo se ha traducido en una falta de confianza en las expectativas que se tienen de que este gobierno resuelve algunos de los problemas prioritarios del país. De hecho alrededor de un 47% de los entrevistados dijo tener poca o ninguna confianza de que la situación del país mejore en lo que resta de la administración Chinchilla Miranda. Ahora bien, los líderes sociales no son tan negativos en todas las áreas de gestión. De hecho un 40% de ellos afirma que la presidenta podría mejorar la producción nacional y otro 50% afirma que habrá alguna mejora en el clima de negocios. No obstante, agendas cruciales para el gobierno como la desigualdad social o la reducción de la pobreza (puntos cruciales de su campaña política), no tendrán grandes cambios. De hecho, casi el 80% dice no tener confianza en que el gobierno resuelva los problemas de pobreza del país.

Gran parte del problema es que este gobierno está sobrado de retos políticos y económicos que debe superar con el fin de hacer algún tipo de contribución política en los sectores mencionados. Primero que nada, la presidencia debe ver como podría superar los problemas de diálogo que tiene con muchos de los sectores aquí entrevistados pero así también otros representantes sociales y de partidos políticos. La falta de una concertación social en este gobierno se reconoce como uno de los problemas más importantes que afectan al país, según los entrevistados. Segundo, la presidencia también debe comenzar a movilizar su ejecución de agendas públicas. Una gran preocupación de los líderes de ambos campos es que aunque se tienen los recursos, las agendas públicas no están caminando. Esto tiene que ver con un gran conjunto de factores como la falta de un planeamiento efectivo y la ausencia de jerarquías claras en la administración. Tercero, ciertamente el gobierno tiene el poder necesario para movilizar su agenda, pero, existen dificultades importantes con respecto al poco tiempo que le resta y las transformaciones del contexto que se avecinan. Difícilmente el gobierno logrará movilizar su agenda en el marco de una elección interna en el PLN que se acerca y una crisis económica que se vislumbra.

Balance final y conclusiones

Cuando fueron consultados sobre los problemas nacionales que resultaban más importantes para el país, un 40% de los informantes señaló que el más importante era la falta de gobernabilidad. Este problema superó otros de gran importancia para la población costarricense como la inseguridad ciudadana, el estado de la infraestructura o la situación económica actual. No obstante, la forma en que los líderes entrevistados comprenden este problema puntual es bastante diferente. Predominan aquí dos puntos de vista interrelacionados pero conceptualmente distintos de lo que significa este problema.

Para muchos de los líderes empresariales entrevistados, gobernabilidad tiene que ver con la forma en que las agencias del gobierno deben coordinarse con otros actores sociales con el objetivo de producir resultados a partir de la agenda de políticas públicas. Así, el núcleo de esta definición tiene que ver más con un sentido de urgencia en la toma de decisiones y se vincula necesariamente con la reducción de tiempos y costos de transacción de la decisión del sistema político. Es en otras palabras un problema de economía procesal resoluble otorgando al estado las herramientas para garantizar una mayor eficiencia para obtener resultados políticos. En este sentido, la preocupación central de los entrevistados es que el sistema político es incapaz de resolver rápidamente los problemas que tiene el país. Como diría uno de ellos *“el sistema político (...) es una máquina que se encuentra trabada y que no cuenta con una capacidad de acción política propositiva, o sea, hay una parálisis total del sistema”*.

En una parte más prospectiva de la entrevista, muchos de los líderes empresariales profundizaron sobre los cambios que consideran necesarios que el sistema político debe sobrellevar para atender la ingobernabilidad. Para ellos, la salida es necesariamente una reforma del estado costarricense, la cual transcurre en términos del mejoramiento de la eficiencia política. En este sentido, se trata de un extenso proceso de transformación de las relaciones políticas entre los poderes de la república, incluyendo la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, pero orientado hacia un empoderamiento del liderazgo de la figura presidencial y de su gabinete. La argumentación seguida aquí es que el sistema presidencialista del país impide al presidente a movilizar su agenda de forma efectiva, dado que se encuentra continuamente retado por múltiples sectores del estado. Lo que preocupa en particular a estos sectores es la capacidad de entramamiento con que cuentan sectores políticos minoritarios como diputados minoritarios – a través del uso del filibusterismo parlamentario – y agencias públicas específicas – que les faculta limitar el poder político de rectoría ministerial.

De esta forma, para estos sectores, la reforma política debería transcurrir por diferentes temas puntuales incluyendo el establecimiento de atribuciones de rectoría más clara a favor de la presidencia como el establecimiento de un limitado decreto ley y acciones para facilitar la aprobación más veloz de proyectos con acuerdo de mayorías en el Congreso. No obstante, el punto crucial que pareció ser común en las entrevistas es la necesidad de definir mecanismos para jerarquizar la estructura de decisión en sectores institucionales. Existe una preocupación que consiste en las entrevistas sobre los términos a los que lleva la ausencia de un mandato fuerte para orientar el trabajo, especialmente de entidades autónomas. Esto implica el desarrollo de mecanismos que faculten a las cúpulas ministeriales tener un mayor control sobre lo que hacen y pueden hacer estas entidades puntuales.

Ahora bien, desde la perspectiva de líderes sociales y algunos empresariales, la ingobernabilidad viene relacionada con la idea de fomentar la interacción entre el gobierno y organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, tiene que ver con el involucramiento de organizaciones sociales en la toma de decisiones a través de redes de decisiones políticas mixtas. En este marco, la agenda prioritaria tiene que ver con la promoción de un largo y extenso proyecto de concertación social destinado a atender a un fin puntual, la definición y el ajuste de las metas políticas de la sociedad costarricense mediada por la contribución compartida de tanto gobierno como de organizaciones sociales. En este sentido, la reforma política es una necesidad política que se comparte con la posición anterior, pero esta no está definida precisamente por términos de eficiencia o productividad sino que en términos de representatividad democrática en la dirección del proyecto de desarrollo nacional. Se busca con ello resolver lo que se percibe como una baja representatividad de ciertos sectores sociales en las decisiones cruciales sobre el rumbo del país. Así, fue común oír desde estos grupos la necesidad de un acuerdo o contrato nacional desde el cual se pudiera construir una agenda país que fuera igualmente beneficiaria a todos los sectores y fundada sobre conceptos como la paz y la justicia social.

Fuentes de información

Alfaro, R.; J.A. Rodríguez y J. Vargas-Cullel (2010). *Cultura política de la democracia en Costa Rica, 2010*. San José: Programa Estado de la Nación, USAID y Vanderbilt University.

Almond, G.A. y S. Verba (1963). *The civic culture: political attitudes and democracy in five nations*. Princenton: Princeton University Press.

CEPAL (2011). *Anuario estadístico 2011*. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Gomez, S. y K. Meneses (2011). *Mapeo político del Plan Fiscal 2010*. San José: Programa Estado de la Nación.

Hay, C. (2006). 'Ideas and the construction of interests', en Béland, D. y R.H. Cox (eds.). *Ideas and politics in social science research*. Oxford: Oxford University Press: 65-82.

Inglehart, R. y H.D. Klingemann (2000). 'Genes, culture, democracy and happiness', en Diener, E y E.M. Suh (eds.). *Culture and subjective well-being*. Cambridge: MIT Press: 165-183.

Lichterman, P. y D. Cefai (2006). 'The idea of political culture', en Goodin, R.E. y C. Tilly (eds.). *The Oxford Handbook of contextual political analysis*. Oxford: Oxford University Press: 392-415.

MIDEPLAN (2011).

Norris, P. (ed.) (1999). *Critical citizens: global support for democratic government*. Oxford: Oxford University Press.

PEN (2010). *Dieciseisavo Informe Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible*. San José: Programa Estado de la Nación.

Snow, D.; B. Rochford; S. Worden y R.D. Benford (1986). 'Frame alignment processes, micromobilization and movement participation', en *American Sociological Review*. 51: 464-481.

Entrevistas:

Bravo, B. Presidente. Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles de Costa Rica (CAPROBI). 4 de junio de 2012.

Brenes, J. Presidente. Asociación de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS). 15 de mayo de 2012. (realizada por María Lourdes Villalobos).

Burgos, M. Presidente. Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (CACORE). 19 de mayo de 2012 (realizada por María Lourdes Villalobos)

Chavarría, L. Presidente. Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (UNDECA). 15 de junio de 2012.

Chavez, F. Presidente. Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE). 12 de junio de 2012.

Delgado, G. Presidente. Cámara Costarricense de la Construcción (CCC). 8 de junio de 2012.

Hernández, D. Presidente. Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR). 9 de junio de 2012.

Muñoz, J.A. Presidente. Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (ANCHAM). 11 de junio de 2012.

Ovares, A. Director. Asociación Nacional de Educadores (ANDE). 14 de junio de 2012.

Pacheco, R. Vicepresidente. Cámara Costarricense de Hoteles (CCH). 27 de mayo de 2012.

Piedra, G. Presidente. Cámara Nacional de Radio (CANARA). 8 de mayo de 2012.

Ramos, J.C. Presidente. Cámara Nacional de Turismo (CANATUR). 20 de mayo de 2012.

Rodríguez, M. Presidente. Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP). 14 de junio de 2012.

Schyfter, M. Presidente. Asociación Nacional de Exportadores de la Industria Textil (ANEIT). 7 de junio de 2012.

Volio, C. Presidente. Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE). 8 de junio de 2012.